



Aviso Legal

Artículo de divulgación

Título de la obra:	México año 2000
Autor:	Favre, Henri
Forma sugerida de citar:	Favre, H. (2000). México año 2000. <i>Cuadernos Americanos</i> , 6(84), 37-57.
Publicado en la revista:	<i>Cuadernos Americanos</i>
Datos de la revista:	
ISSN:	0185-156X

Nueva Época, Año XIV, Núm. 84, (noviembre-diciembre de 2000).

Los derechos patrimoniales del artículo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este artículo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>



D.R. © 2021 Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04510, México, Ciudad de México.

Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510,
Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx/>
Correo electrónico: betan@unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ Sin derivados: si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia.

México año 2000*

Por Henri FAVRE

Centre Nationale de la Recherche Scientifique, Francia

AL CRUZAR EL UMBRAL DEL SIGLO XXI, México entra en uno de esos años que el ciclo invariable de la vida política hace volver inexorablemente cada sexenio, y en el curso de los cuales la población es llamada a las urnas para elegir al presidente y renovar el Congreso. Por largo tiempo —de hecho desde 1929, fecha de la fundación del Partido Revolucionario Institucional bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario— estas elecciones generales constituyeron un rito de comunión patriótica más que un mecanismo por el cual los ciudadanos elegían a sus dirigentes. El presidente saliente designaba a su sucesor, que el PRI hacía elegir empleando todos los recursos del aparato de Estado. Los escaños del Senado y de la Cámara de Diputados eran repartidos entre los diferentes sectores del partido, luego ocupados de la misma manera. La oposición se veía relegada a un papel figurativo, cuando no era que consentía a aparecer como comparsa.

La descorporativización de la sociedad mexicana, que se inicia en los años ochenta y se precipita luego bajo el efecto de las reformas neoliberales, llevó al desmantelamiento progresivo del sistema de encuadramiento político de la población. Liberó poco a poco al electorado cautivo del PRI y abrió a los partidos de oposición posibilidades nuevas que han sido explotadas tanto a la izquierda como a la derecha. El régimen se encontró comprometido con un proceso de modernización democratizante que el presidente Carlos Salinas de Gortari y su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, parecen haber sufrido más que querido, pero que de todos modos acompañaron, frenándolo a menudo, guiándolo a veces. Hoy, aunque el cordón umbilical que liga al PRI con el Estado no se haya cortado, las elecciones se han hecho suficientemente competitivas como para que el resultado de las que tienen lugar en julio del 2000 permanezca incierto.

*Este texto fue publicado en francés en *Problèmes d'Amérique latine*, núm. 36, antes de las elecciones del 2 de julio del 2000 [d. E]

Sin embargo, más que los resultados de un escrutinio por primera vez muy abierto, son las circunstancias imprevisibles en las que éste se va a desarrollar lo que mantiene en suspenso a la opinión pública. La historia del último cuarto de siglo ha enseñado a los mexicanos, de forma traumática, que los años de elecciones generales tienden a revelarse críticos. En 1976, en efecto, la transmisión de las funciones presidenciales estuvo acompañada de una fuerte devaluación de la moneda. En 1982 ésta se dio mientras estallaba la crisis de la deuda que iba a inaugurar la "década perdida" para el desarrollo de América Latina, propagándose al conjunto del subcontinente. Y en 1994 estuvo marcada por la insurrección chiapaneca, luego por el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, después por la muerte del secretario general del partido en el poder, José Francisco Ruiz Massieu y por fin por un nuevo desastre financiero, que no tuvo sin duda el mismo efecto que el precedente en el exterior, pero cuyas secuelas internas no se han borrado del todo. Por ello, no es sin aprehensión que el país avanza hacia las próximas fechas electorales.

Elementos de un balance del sexenio

LA crisis financiera que se produce en diciembre de 1994, mientras el presidente Zedillo acaba de entrar en funciones, tiene su origen en una devaluación que la paridad de la moneda nacional hacía inevitable, pero de la cual Carlos Salinas, preocupado por su image: en la historia, no había querido asumir la responsabilidad. Por demasiado tiempo diferida, y además mal administrada, esta devaluación desencadena un movimiento especulativo en contra del peso, que se hunde. Precipita la fuga de capitales, que ya tendían a replegarse hacia Estados Unidos, donde las tasas de interés subían desde la primavera, en espera de la instalación del nuevo equipo dirigente.

El restablecimiento de los grandes equilibrios económicos

EL gobierno solicita, y obtiene inmediatamente, del Tesoro estadounidense y de las instituciones financieras multilaterales, un compromiso de crédito de cuarenta mil millones de dólares, de los cuales diecinueve son efectivamente movilizados. Por otra parte, adopta medidas que se inscriben en la línea de la política neoliberal

fijada por Carlos Salinas y no se apartan de ella. El objetivo principal es abatir la inflación que, de 7.1% en 1994, pasa a 52% en 1995, y restaurar los equilibrios macroeconómicos deprimiendo el gasto público, aumentando la presión fiscal y alzando las tasas de interés. Estas medidas, aplicadas sin titubeos, hundieron la economía en la recesión. El PIB, que había crecido 4.5% en 1994, cae 6.5% el año siguiente. Sin embargo, mientras que el peso, en flotación, se estabiliza en el mercado de cambios y la inflación parece controlada, el crecimiento repunta en 1996, estimulado por el regreso de los inversionistas extranjeros y el repunte de las exportaciones. Pero la baja de los precios de hidrocarburos que se inicia en 1998 lleva de nuevo al gobierno —cuyos ingresos fiscales provienen 30% del sector petrolero— a efectuar cortes severos en el presupuesto, que frenan el ritmo de la recuperación. De manera que, durante el periodo quinquenal de 1995-1999, el PIB no crece sino 2.8% de promedio anual.

El crecimiento será abatido todavía mucho tiempo por el costo del sostenimiento del sistema bancario. En efecto, la recesión de 1995 ha colocado a los bancos, recientemente privatizados, al borde de la quiebra. Numerosas empresas e innumerables particulares no tienen la capacidad de reembolsar los préstamos que les habían otorgado imprudentemente quienes se habían hecho banqueros gracias a una privatización chapucera. Estimados al principio en 65 mil millones de dólares, el total de los créditos dudosos se establece luego en 93 mil millones —104 según la agencia Standard & Poor's— y representa 19.3% del PIB. En 1998, el gobierno decide convertir dos terceras partes de estos créditos en deuda pública con la emisión de bonos de Estado, y confiar a un Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) el cuidado de realizar los activos de los acreedores. La diferencia entre el servicio de esta deuda y los ingresos esperados por el IPAB deberá representar para el presupuesto una carga anual de varios miles de millones de dólares en el curso de la próxima década.

Por otra parte, el crecimiento seguirá estando cada vez más condicionado por la evolución de la actividad en Estados Unidos. La integración de la economía mexicana a la economía estadounidense se aceleró desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primero de enero de 1994, tanto que hoy día México realiza más de 80% de sus intercambios comerciales con su vecino del norte. La situación que se deriva explica sin duda la rapidez con la que Washington voló en

ayuda del gobierno mexicano en 1995. Tampoco es ajena al flujo continuo de inversiones en dirección a México en 1997 y 1998, mientras que las crisis asiática y rusa desviaban los capitales internacionales de los países emergentes. Por el contrario, hace que toda recesión proveniente del norte sólo pueda tener en el sur un carácter fuertemente depresivo. Ahora bien, una recesión semejante vendrá antes o después.

Para limitar las consecuencias negativas de una dependencia económica demasiado estrecha frente a Estados Unidos, el gobierno mexicano firma un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea el 24 de noviembre de 1999. El acuerdo, que deberá entrar en vigor el primero de julio del 2000, prevé la abolición mutua de las barreras aduaneras, en el 2003 para la Unión Europea y en el 2007 para México. La Unión Europea espera un crecimiento de su participación en las importaciones mexicanas —que ha caído a 6% o por lo menos detener la caída. Pero México no puede razonablemente esperar en un futuro previsible que se modifique de forma sensible la distribución geográfica de sus intercambios internacionales y la importancia relativa de sus socios comerciales.

Para que no haya acontecimientos imprevistos que puedan comprometer el restablecimiento de la situación económica en ocasión de las próximas elecciones, el gobierno procedió a reestructurar la deuda y a reforzar las reservas del Banco Central con créditos *stand by*. Por otra parte, la subida de los precios de los productos petroleros desde fines de 1999 le ha permitido establecer para el año 2000 un presupuesto menos austero que el precedente. Habituales en los años electorales, estas liberalidades presupuestarias, aunque financiadas por el excedente del ingreso previsto, no pueden ser consideradas como la contraparte social del “blindaje económico” que se estableció.

La acumulación del retraso social

LA política que el gobierno llevó a cabo para salir de la crisis financiera tuvo una fuerte y duradera incidencia en la situación de las clases populares: provocó el aumento del desempleo, la disminución del poder adquisitivo y la extensión de la pobreza en el conjunto del país. De hecho, el restablecimiento de los grandes equilibrios se obtuvo utilizando el empleo y el consumo como variables de ajuste.

Las quiebras de empresas, consecuencia del aumento de las tasas de interés, se tradujeron en la destrucción de más de 800 000 empleos en 1995. Si el sector exportador empezó a reencauzarse desde el año siguiente, las empresas que producían para el mercado interno, que sigue sumido en el marasmo, tienden a mantener el empleo en su nivel más bajo. El número de puestos de trabajo creados en el periodo 1995-1999 no sobrepasa el promedio anual de 600 000. Representa sólo 40% de los empleos necesarios cada año para absorber a los recién llegados al mercado de trabajo.

Por otra parte, los salarios no han logrado alcanzar la inflación, que amputa un cuarto de su poder de compra en cinco años. El índice de los salarios reales, en efecto, se desploma. Pasa de 100 en septiembre de 1994 a 70 en 1996 y no sube sino a 75 en 1999. La caída del salario mínimo es todavía más vertiginosa. En mayo de 1999 acusaba pérdidas acumuladas en valor adquisitivo de 35.8% en relación a 1994, consecuencia, especialmente, de la liberación de los precios de los artículos alimenticios de primera necesidad, que se prosigue obstinadamente, y que termina el primero de enero de 1999 con la eliminación de las subvenciones a la alimentación básica de la población, que es la tortilla. Ahora bien, 40 millones de mexicanos viven con un salario mínimo y 21 millones con dos, lo que no alcanza, por otra parte, a satisfacer las necesidades fundamentales de una familia, de creer a las estadísticas oficiales.

La degradación del nivel de vida de los asalariados no sólo acentuó las desigualdades sociales, sino también las disparidades regionales, ya que los trabajadores con salario mínimo representan 60% del conjunto de los asalariados en los estados del sur, contra 15.6% en los del norte. Sin embargo, las reacciones que suscitó fueron escasas. La estampida de huelgas que se vio en 1995 pronto recayó en el curso de los años siguientes. Las organizaciones sindicales ligadas al PRI, que todavía conservan mucha influencia, contribuyeron a extinguirlas. En cuanto a los sindicatos libres, no disponen de fuerza suficiente para sostenerlas. En efecto, la descorporativización progresiva del mundo del trabajo favorece menos, al parecer, el surgimiento de un movimiento sindical autónomo que la creación, a nivel de empresas, de "sindicatos casa", cuya capacidad de acción está limitada por el empleador y fuertemente restringida por el peso colosal del desempleo.

Tardíamente, a mediados de 1997, el gobierno lanzó un programa de compensación social (PROGRESA) en favor de los más ne-

cesitados entre las víctimas de su política económica. El PROGRESA se distingue del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), en vigor durante el sexenio salinista, en varios aspectos esenciales. Ante todo, no apunta a la colectividad local, sino a la unidad familiar. Luego, no pretende generar ocupación, sino ofrecer paliativos de sobrevivencia. Por fin, su manipulación con fines políticos, que no es imposible, parece mucho más difícil de implementar. Por otro lado, mientras que el PRONASOL llevaba a las organizaciones de barrio o de pueblo los recursos necesarios para microrrealizaciones susceptibles de mejorar las condiciones de vida de forma modesta pero rápida y tangible (conducción de agua potable, desagües, caminos etc.), el PROGRESA suministra, sobre todo a las mujeres, sumas financieras que permiten nutrir de forma conveniente a sus familias, hacer cuidar a los niños y mantenerlos en la escuela. En 1999, una décima parte de la población mexicana se benefició con estas sumas. Sin embargo, en la misma fecha, 56.7% de los mexicanos padecían desnutrición, contra 47.6% en 1994, y 43% vivían por debajo del umbral de pobreza calculado por las Naciones Unidas.

El secretario de Economía debía declarar, para enorgullecerse, que las sumas inscritas en los rubros sociales del presupuesto del Estado representaban un total nunca alcanzado en toda la historia del país. Sin embargo, en relación con la riqueza nacional el gasto social es asombrosamente pequeño. En 1999 equivalía apenas a 9.1% del PIB, contra 9.9% en Zambia, 15.2% en Chile y 33.9% en Francia. La situación resultante es considerada suficientemente grave para que, a fin de año, la patronal mexicana exprese públicamente su inquietud, y que el banco estadounidense J. P. Morgan, clasificara a México en el sexto rango mundial como país de riesgo, antes de Indonesia.

El ascenso de la oposición política

AUNQUE no esté traducido en toda su profundidad, el malestar social influye en los resultados de las elecciones legislativas que se celebran en julio de 1997. Estas elecciones fueron precedidas por un nuevo reacomodo de las instituciones electorales destinadas a garantizar la transparencia de los escrutinios. El año anterior fue creado un Tribunal Electoral, dependiente exclusivamente del Poder Judicial, y cuyos miembros son nombrados por el Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia. Además, el Distrito

Federal, que era administrado por un regente designado por el presidente, pasaba al régimen común de los estados. Era dotado de una legislatura y de un gobernador que debían ser elegidos al mismo tiempo que los diputados federales.

Estas elecciones crean una situación totalmente inédita en la vida política mexicana. En efecto, si el PRI conserva holgadamente el control del Senado, pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al no reunir sus candidatos más que 38.5% de los sufragios. A la derecha, el Partido Acción Nacional (PAN), con 26.6% de los votos, sufre un pequeño retroceso. pero a la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que obtiene el favor de 25.7% de los electores, progresa sensiblemente. Por otra parte, el PRD obtiene el Distrito Federal, del cual Cuauhtémoc Cárdenas, su dirigente, se convierte en el primer gobernante.

De este modo, por primera vez la Cámara de Diputados es dominada por la oposición. De repente deja de ser una simple cámara de registro donde el presidente hace rubricar sus decisiones soberanas. Esta nueva situación contribuye a reequilibrar las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Ante todo, coloca al gobierno bajo la vigilancia efectiva de los diputados, que pueden en todo momento constituir una comisión de investigación sobre la utilización de los dineros públicos. Luego, lo obliga a negociar constantemente la aplicación de su política. Los optimistas consideran que es generadora de una cultura parlamentaria que no puede sino extenderse en el futuro.

En todo caso, el temor a una parálisis de las instituciones se reveló sin fundamento. Si el PRD se abandona a las delicias de la guerrilla antigubernamental, el PAN, que no reacomodó con Zedillo la alianza que había concluido con Carlos Salinas y que recuperó toda su libertad, opta por una posición más matizada. Su preocupación por encarnar ante los ojos de la opinión pública una oposición responsable lo lleva a enmendar los textos del gobierno, a menudo a transformarlos, a veces a subvertirlos, más que a rechazarlos sistemáticamente. Esta estrategia, que parece rendir frutos, queda ilustrada por la actitud que adoptan los diputados panistas en 1998, en el debate sobre la conversión de las deudas dudosas de los bancos en deuda pública.

Estos créditos habían aparecido dudosos en el doble sentido del término. Por una parte no eran recuperables. Por otra parte algunos procedían de préstamos que los banqueros se habían concedido a sí mismos, o que habían consentido a parientes, amigos o

asociados, incluso al PRI, al margen de la ley, sin esperanzas de reembolso. Cuando el gobierno pretende imputarlas en su totalidad a los contribuyentes, el PAN une sus voces a las del PRD para obstaculizar sus planes. Pero mientras que el PRD se atrinchera con intransigencia tras el principio de la separación de lo público y lo privado, a riesgo de provocar el colapso del sistema bancario, el PAN exige y obtiene que las deudas ilícitas o fraudulentas no sean socializadas y que los pequeños deudores se beneficien de un trato privilegiado. De esta forma se muestra como el partido que rechazó el proyecto gubernamental pero que supo formular un plan alternativo más equitativo, una de cuyas ventajas políticas, y no la menor, es desnudar la colusión entre el PRI y determinados banqueros en quiebra.

La misma estrategia fue implementada en ocasión de la discusión anual de la ley de finanzas, que da lugar ahora a ásperas negociaciones y cuyo voto ya no se logra sino después de una sesión extraordinaria y al precio de múltiples concesiones gubernamentales. El PAN arrincona al gobierno ante la difícil opción de aceptar enmiendas —que no siempre son cosméticas pero que tampoco tienen nada de irrazonable— o de arriesgarse a colocar al Estado en situación de cesación técnica de pagos, pues la legislación mexicana no prevé el caso de que el presupuesto del año siguiente no sea adoptado el 31 de diciembre. En 1998, los diputados panistas impusieron de este modo una redistribución más generosa de los ingresos federales en provecho de las colectividades, y en 1999 un aumento sensible de los gastos sociales.

La disminución de los poderes presidenciales frente al Congreso se revela también en la incapacidad en que se encontró Ernesto Zedillo para operar tres grandes reformas que se habían inscrito en la agenda gubernamental. La primera se refiere a la legislación del trabajo, que el mundo de los negocios considera inadecuada a las exigencias actuales de la economía. Sin duda es la menos urgente, porque el Código Federal del Trabajo ya es tergiversado, o simplemente ignorado por los empleadores en sus disposiciones más estrictas, y su flexibilización no haría sino poner el derecho de acuerdo con la práctica generalmente establecida. La segunda reforma se refiere a la fiscalidad. En el espíritu del FMI que la pide con insistencia, debe simplificarse el sistema fiscal, ampliar la base del impuesto y reducir la tasa de imposición de las sociedades aumentando al mismo tiempo los ingresos del Estado, objetivos que no pueden alcanzarse sino acrecentando la

fiscalidad sobre las clases medias y los sectores populares. En cuanto a la tercera reforma, aspira a abolir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que es incapaz de responder a la demanda creciente de la economía, para permitir a los inversores privados tomar el relevo en la producción de energía eléctrica. Rechazadas de un año a otro, estas reformas, poco populares, fueron finalmente postergadas *sine die* por común acuerdo de todos los partidos.

Las grandes maniobras preelectorales

EN realidad, el debilitamiento de la posición presidencial en el sistema político no proviene sólo del ascenso de la oposición ahora mayoritaria en el Congreso. También tiene que ver con la personalidad del presidente Zedillo y con las circunstancias en que fue elegido. Hombre sin duda honesto y competente pero desprovisto de carisma, cuya carrera se desarrolló siempre en la administración, Ernesto Zedillo representa a los tecnócratas que, desde hace treinta años, han escalado el poder y han llegado a acapararlo en ocasión de la crisis de 1982, desplazando a los políticos. En 1994 es elegido por Carlos Salinas, del cual es ministro, como candidato del PRI, en la confusión que sigue al asesinato de Luis Donaldo Colosio, sobre el cual había caído la primera designación del presidente. Aunque miembro del partido desde su juventud, no dispone de las bases de apoyo en la formación que lo hace elegir, y no logrará, por otra parte, crearlas nunca. El manejo de su sucesión y del problema de los vencimientos electorales del año 2000, que se inscriben pronto en el centro de las preocupaciones de la clase política, manifiesta toda la distancia que se extiende entre el presidente y un PRI reacio y un poco desconfiado.

El combate de los jefes

DESDE 1996, la asamblea del PRI adopta por principio que el candidato del partido para la próxima elección presidencial deberá haber cumplido con anterioridad un mandato electivo. Esta disposición, que marca la ofensiva de los "políticos" conservadores contra el poder tecnocrático y modernista, limita singularmente el número de personas que el presidente podría elegir para su sucesión. El entorno de Zedillo, en efecto, está compuesto por administradores que, en su mayoría, nunca solicitaron los sufragios de los electores.

Considerando que la relación de fuerza no le es favorable y que su promesa reiterada de no intervenir en la designación de su sucesor no halla sino escepticismo, el presidente se adhiere a la idea de las elecciones primarias. Propone que estas primarias se desarrollen sucesivamente en cada estado, como en Estados Unidos, y que un congreso llegue a validar los resultados. Pero tal procedimiento a la estadounidense es considerado demasiado largo y dejaría demasiado margen para que el presidente influya sobre su curso. A sugerencia de los clanes tradicionales que han recuperado la iniciativa, el PRI decide en mayo de 1999 que las primarias tendrán lugar simultáneamente en todas las circunscripciones electorales y que será proclamado vencedor quien haya triunfado en el mayor número de circunscripciones. Por otra parte, las primarias estarán abiertas no sólo a los miembros del partido, sino a todos los ciudadanos en edad electoral.

La campaña para la investidura priista se abre el primero de agosto de 1999. Cuatro candidatos toman parte, pero la competencia se circunscribe de hecho a dos de ellos: Francisco Labastida Ochoa y Roberto Madrazo Pintado. El primero, ex gobernador de Sinaloa, acaba de renunciar a su puesto de secretario de Gobernación para lanzarse a la arena electoral. El segundo, gobernador de Tabasco, pertenece a una vieja familia priista que dio al partido, en los años sesenta, uno de sus más notables dirigentes.

La competencia entre los dos hombres pronto se vuelve un enfrentamiento cuyos múltiples desbordamientos no pueden dominar fácilmente las instancias del PRI. Más allá de una oposición de caracteres, manifiesta en su violencia toda una serie de fracturas de orden político, social y geográfico. Labastida es el representante de la tecnocracia en el poder. Se identifica con la política neoliberal que contribuyó a implementar en sus diferentes funciones administrativas y gubernamentales que ejerció desde 1988. Es también un hombre del norte, de una región moderna, animada por el espíritu de empresa y favorecida por la apertura de la economía nacional al mundo. Por el contrario, Madrazo es un hombre del sur, de ese sur pobre y arcaico, predominantemente rural y campesino, donde el PRI conserva todavía profundas raíces en la población y que sufre duramente las consecuencias perversas de la modernización y de la mundialización. Por otra parte se convierte en el vocero de las víctimas del neoliberalismo, y no vacila en criticar al gobierno y en recurrir, para hacerlo, a argumentos que toma prestados al PRD. Frente a su rival, candidato de la conti-

nidad, aparece como el campeón de la ruptura y del retorno a las fuentes populares del priismo.

Por mucho tiempo colocado a la cabeza de los sondeos, Madrazo ve que sus posiciones se derrumban desde el momento en que la dirección del PRI, presionada por Zedillo, retoma vigorosamente en sus manos el aparato del partido y juega con el reflejo legitimista de los militantes y simpatizantes. Tanto que en las elecciones del 7 de noviembre de 1999, a las que concurrieron más de nueve millones de mexicanos, no obtuvo sino 2.7 millones de votos y no ganó sino 21 de las 300 circunscripciones. Labastida, que recoge dos veces más sufragios, triunfa en 272 circunscripciones. Las quejas presentadas ante los escrutadores de irregularidades no conciernen sino a ocho circunscripciones y a menos de 1% de los boletines. Por otra parte, la amplitud de la victoria de Labastida alejará el riesgo de escisión que la dureza de la lucha deja temer en el seno del partido, mientras que las liberalidades gubernamentales, de las que se benefician contribuyentes y partidarios de Madrazo, contribuirán a la cicatrización de muchas heridas.

Es por lo tanto un partido renovado el que se prepara a afrontar el año 2000 y sus plazos electorales. Dado por moribundo en muchas ocasiones, el PRI dio una vez más prueba de su notable capacidad de adaptación. En los excesos mismos a los que dio lugar, la campaña de las primarias, que fijó en ella la atención popular durante catorce semanas, le aseguró una enorme publicidad. La imagen que ofreció de sí mismo es la de un partido moderno, abierto a la confrontación de opiniones y que practica la democracia interna, a diferencia de las formaciones políticas rivales.

Paradójicamente, la renovación del partido fue inspirada y dirigida por los clanes tradicionales que constituyen la facción conservadora del PRI. Estos grupos de interés, que han sostenido a Madrazo en su empresa, se sienten cada vez más amenazados en sus posiciones económicas por la modernización neoliberal. Por otra parte, disponen de una sólida implantación política en los sectores sociales que todavía no están modernizados y que pueden no serlo. Empujando al partido a adoptar procedimientos democráticos, intentan movilizar las bases que controlan, contra una política que los afecta y contra los que la conducen. Pero su proyecto al final abortó, ya que al término de estos mismos procedimientos el favorito de Zedillo fue investido como candidato a la presidencia.

Aquí llegamos al obstáculo que encuentra la democratización, tanto en el interior del PRI como en el exterior. Hoy este obstáculo

procede menos de instituciones que de mentalidades. Numerosos individuos, acostumbrados a votar por el candidato que les era designado, se hallan desconcertados por la opción que por primera vez se les pide realizar. Se sentían naturalmente inclinados por Madrazo, que representaba mucho mejor su sensibilidad y sus intereses, pero al saber que Labastida tenía el favor secreto del poder, han votado, a fin de cuentas, por este último. Madrazo seguramente cayó en su propia trampa al denunciar públicamente a Labastida como candidato oficial a lo largo de toda la campaña. Contribuyó torpemente a provocar el reflejo legitimista del cual fue víctima.

El triunfo del outsider

ANTES que el PRI invistiera a su candidato, el PAN y el PRD ya habían elegido al suyo. Desde julio de 1997 Vicente Fox Quesada, gobernador panista de Guanajuato, había revelado sus aspiraciones a la presidencia ante la consternación del estado mayor de su partido. Los dirigentes del PAN, en efecto, nunca apreciaron a este hombre un poco original, y menos todavía su estilo teñido de populismo que rompe con la actitud acartonada propia de los panistas de raza. Sin embargo no carece de talento ni de mérito.

Director general de Coca-Cola en México, Fox cambia el traje de tres piezas por la mezclilla, el sombrero y las botas de ranchero, para lanzarse a la política y hacerse derrotar fraudulentamente por el candidato del PRI al gobierno de Guanajuato en 1991. El fraude provoca tal escándalo que Carlos Salinas ruega al gobierno mal elegido que dimita. El puesto sin embargo no le toca al verdadero vencedor de la elección, sino a otro panista cuyo nombre el partido ha soplado al presidente. Fox va a concebir un tenaz rencor.

En 1995, Fox tiene su revancha. Gana holgadamente su estado, con dos veces más votos que su adversario priista. Eligiendo a sus colaboradores por los únicos criterios de la honradez y la competencia, integra a su equipo elementos considerados sanos del PRI local. Las campañas promocionales que emprende en el extranjero y que dirige en persona producen frutos. Las inversiones directas fluyen, la economía prospera, el nivel de vida aumenta, mientras que el sistema de salud y la enseñanza superior son reformadas y las finanzas saneadas. En resumen, Guanajuato, dirigido como una empresa, se convierte en un estado que su gobernador puede proponer como modelo para todo México.

Pero mientras más aumenta la popularidad de Fox, más crecen las reticencias del PAN sobre él. En efecto, interfiere con la estrategia del partido, que no es la de tomar el poder en la cima, sino de conquistarlo gradualmente a partir de la base, en los municipios primero, luego en los estados. Esta estrategia se articula en torno a la idea de que un presidente panista heredaría necesariamente una administración tan completamente fiel al PRI, que no le permitiría gobernar. En 1994, el candidato del PAN a la presidencia, Diego Fernández de Cevallos, había, por otra parte, súbitamente interrumpido su campaña tras haber zarandeado a Zedillo en un debate televisivo, lo cual había suscitado en el momento algunas interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. Desde 1997, los dirigentes panistas están quizás menos dispuestos a operar una revisión estratégica, por cuanto el partido encuentra en condiciones de obtener del poder lo esencial de lo que desearían, negociando los indispensables votos del PAN en el congreso.

Pero la iniciativa de Fox es también mal aceptada porque parece amenazar los delicados equilibrios gracias a los cuales los legatarios de los dirigentes históricos, formados por Jacques Maritain, por Emmanuel Mounier y por el catolicismo social, llegan a cohabitar en las instancias dirigentes con los representantes de la empresa, cuyo peso no deja de aumentar en el interior del aparato. Ahora bien, el gobernador de Guanajuato está íntimamente ligado a los empresarios que animan y financian la asociación Amigos de Fox, que éste fundara para sostener sus ambiciones. Una buena parte de la hostilidad de la que es objeto en sus propias filas proviene del miedo de muchos responsables de que el PAN termine por transformarse en el partido de los medios de negocios.

Cuando los adherentes al PAN son llamados a elegir a su candidato a la presidencia, la popularidad de Fox ha llegado a tanto que nadie piensa en presentarse contra él. El voto interno del 12 de septiembre reviste entonces el aspecto de un plebiscito. Pero este plebiscito no es sino un éxito a medias. Considerando el asunto ya decidido, dos terceras partes de los panistas no se toman el trabajo de desplazarse hasta las urnas.

Si evita pasos falsos y trampas, Fox puede representar para Labastida una seria amenaza. Incluso si el aparato del partido no se moviliza en su favor, es capaz de elevar los votos mucho más allá del electorado tradicional del PAN.

El águila que cae

A la izquierda, las posibilidades de Cuauhtémoc Cárdenas se han empequeñecido paulatinamente, hasta aparecer como muy escasas. El águila, en efecto, declina¹ desde que llegó a la cúspide del Distrito Federal en 1997, arrastrando tras de sí al partido del que es fundador. La gestión de una megalópoli afectada por insolubles problemas constituye siempre un desafío político arriesgado. Sin ser catastrófica, la que Cárdenas ha dado a México no respondió a las expectativas de la población, de manera que el desafío no fue sostenido. La transparencia prometida no tocó la corrupción, mientras la seguridad ofrecida no hizo retroceder la delincuencia. Los dos primeros jefes de policía que la administración cardenista nombró sucesivamente debieron dimitir rápidamente después que se revelaron sus relaciones algo íntimas con el crimen organizado.

Cárdenas no pudo encontrar en el seno del PRD todas las competencias que le eran necesarias, y no supo utilizar todas las que se le presentaban. Se cerró en un círculo de fieles, la mayor parte originarios de su Michoacán natal, a los que lo unían lazos personales a menudo creados en la infancia o en los bancos de la facultad. Repartidos en los lugares estratégicos de la red administrativa, sus dependientes controlan a los funcionarios, que por otra parte son removidos a menudo. Baile de funcionarios, inestabilidad de la administración, discontinuidad en los programas, bloqueo de la toma de decisiones: en esto desemboca un modo de gestión de otra época a la que subyace una desconfianza obsesiva. Ninguna duda cabe que este balance va a pesar muy fuerte en las opciones del cuerpo electoral en el 2000.

Los mismos métodos personalistas y clientelares son establecidos por el PRD, sin otra perspectiva que hacer pasar al gobernador del Distrito Federal a la presidencia de la República y eliminar a quienes puedan obstaculizar su paso. Las elecciones internas convocadas en marzo de 1999 para renovar las instancias dirigentes del partido quedan manchadas con tantas irregularidades que deben ser anuladas. Las nuevas elecciones que tienen lugar en julio no se desarrollan en las mejores condiciones, pero sus resultados son sin embargo validados tras largas tratativas entre las facciones. Porfirio Muñoz Ledo, cofundador del partido y gran rival de Cárdenas, así como la corriente Nueva República que ha fundado,

¹ Cuauhtémoc significa "águila que cae sobre su presa", en náhuatl.

se encuentran marginados. En septiembre, Cárdenas deposita su candidatura en medio de una gran manifestación de sus partidarios en el Auditorio Nacional. El partido constata que no tiene otros candidatos e inmediatamente lo hace constar. Muñoz Ledo deberá ir a buscar su investidura con el ectoplasmático Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), oportunamente resucitado de sus cenizas.

El PRD se parece cada vez más al PRI de antes, cuyas costumbres Cárdenas denunciaba al separarse de él. Su oferta política, inspirada por el nacional-populismo de los años treinta, no sólo es arcaica. Tiende a reducirse a lo que su jefe supremo se obstina en hacer personalmente a la nación. Más grave aún, las estructuras del partido permanecen embrionarias más allá de los límites del Distrito Federal. En los estados que gobierna, en Nayarit, en Zacatecas, en Tlaxcala, el PRD debe su victoria a candidatos priistas disidentes y al aparato local del PRI, del cual estos últimos han conservado el control. En muchas otras regiones, no es más que un membrete que pueden utilizar los grupos más diversos. En Chiapas, por ejemplo, en ocasión de las elecciones municipales de 1998, una disidente del PAN, surgida de la élite local más reaccionaria, y que arrastra tras de sí una sólida reputación racista, se presentó como candidata del PRD a la alcaldía de San Cristóbal.

Si el sistema político mexicano se abrió y modernizó en el curso de los últimos años, sin embargo sigue siendo inestable. Le falta siempre, en efecto, un partido capaz de reunir a la izquierda en torno a un proyecto actualizado, y de orientar y canalizar los movimientos populares. En el estado actual del PRI, amplios sectores de la población, especialmente los que constituyen los marginados y los excluidos, se han librado a las organizaciones de extrema izquierda, con las cuales el partido cardenista lleva a veces el romance muy lejos, pero sin poder sacar ventaja y sin llegar a convencerlos que trasladen su lucha al terreno político.

La violencia insurreccional

EL objetivo que se asigna a la extrema izquierda, en el desmigajamiento de sus múltiples componentes, es provocar una explosión social que engendrará la crisis del régimen. Se trata pues no tanto de tomar el poder por las armas, como de recogerlo después de haber contribuido a derribarlo. A esto se lanza el Ejército Zapatista

de Liberación Nacional (EZLN), que mantiene una situación insurreccional en gran parte de Chiapas desde 1994.

Chiapas insurgente

ESTE pequeño grupo, de ideología marxista, que por su estrategia político-militar y sus prácticas sociales se clasifica en la categoría de las organizaciones de tipo maoísta, ha desencadenado un amplio movimiento que se propaga, desde la selva lacandona, hasta las tierras altas y a otras regiones del estado. Derrotado militarmente doce días después de haberse lanzado a la lucha armada y empujado a su base selvática donde comenzó, el EZLN cambia entonces su política de comunicación externa. Adopta el discurso indianista que mantiene la Iglesia católica local. La imagen del indio que manipula y difunde, recurriendo a las más modernas técnicas de información, le vale las simpatías nacionales e internacionales así como el apoyo de una red planetaria de organizaciones no gubernamentales que drenan importantes recursos hacia la Chiapas insurgente.

De hecho, el movimiento del cual el EZLN fue el detonante está poco centralizado. Hay que distinguir, entre las regiones en revuelta, las que la guerrilla controla, aquellas donde ésta influye, por otra parte en distinto grado, y aquellas en las que no ejerce ni control ni influencia pero donde la población se aprovecha de la circunstancia para arreglar por la violencia problemas a menudo antiguos que nunca encontraron solución pacífica. De una región a otra, de un municipio al municipio vecino, e incluso de una localidad a la localidad más cercana, las motivaciones de los insurgentes pueden variar sensiblemente. Pero cualquiera sea la distancia a la que se sitúan en relación con el EZLN, todos los insurgentes comparten una común hostilidad frente al gobierno, y todos son conscientes de que el alcance de sus fines particulares y a veces divergentes supone el mantenimiento en actividad de la guerrilla.

Después de haber intentado apoderarse del reducto lacandón del EZLN en febrero de 1995, el presidente Zedillo renunció a dar una solución puramente militar al conflicto. El recurso a la fuerza sigue siendo limitado. La policía y el ejército no intervienen sino de forma puntual, para liberar posiciones estratégicas que la guerrilla presiona o, como en la primavera de 1998, para dismantelar "zonas liberadas" que aquélla logró crear fuera de su santuario, especialmente en la frontera guatemalteca y en el valle del Tulija,

que da acceso a la llanura litoral de Tabasco. El gobierno se empeña en reconquistar las poblaciones más que el territorio. Pero los programas de ayuda social que establece tardan en dar los resultados previstos. Tanto más que ningún plan de creación de empleos los acompaña. Ahora bien, el desempleo es hoy el mayor flagelo de Chiapas. Por el contrario, el programa de legalización de la posesión de 250 000 hectáreas de tierras que habían invadido las comunidades campesinas —comenzando por las que estaban afiliadas al PRI— en el curso de los caóticos años 1994 y 1995, dio resultados políticos inmediatos.

En 1996, el gobierno entabló negociaciones con el EZLN sobre la protección de la cultura india, de la cual la guerrilla no parece sin embargo respetuosa en las regiones que controla. Los acuerdos de Larráinzar, con los cuales desembocaron estas negociaciones, se prestan a interpretaciones maximalistas y minimalistas, de manera que su aplicación, de la cual los indios parecen preocuparse poco, sigue suspendida. El EZLN se niega a toda nueva discusión antes que sean aplicados en la interpretación que les da. Según esta interpretación, deberían ser creados enclaves étnicos que gozarían de amplia autonomía cultural, económica y política. Pero el gobierno no puede ignorar que, sustraídos al poder del Estado, tales enclaves serían fácilmente infiltrados por la guerrilla y podrían convertirse en bastiones de la insurrección.

En el curso de los dos últimos años, el movimiento insurreccional se ha desinflado un poco. El EZLN ha perdido la iniciativa y se halla a la defensiva. La corriente de simpatía que suscitó ha comenzado a secarse. El apoyo que recibe del extranjero tiende a ser más medido. En resumen, la magia del guerrillero encapuchado ya no opera como antes. Sin embargo, Chiapas seguirá siendo sin duda durante unos años más, una de las zonas grises del globo donde prevalece la ley de la entropía sobre todas las demás.

La agitación en Guerrero

EL EZLN no es sino la más conocida de las organizaciones de extrema izquierda que preconizan la vía insurreccional y a veces la emprenden. Del Comando Revolucionario Armado del Sur al Frente de Liberación Francisco Villa, las Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional al Partido Revolucionario Obrero-Unión del Pueblo, serían unas veinte o más. No todas tienen la

misma base militante, los mismos medios materiales ni la misma capacidad operativa. Pero todas ambicionan realizar a escala de México lo que el EZLN ha hecho en Chiapas.

En 1996, catorce de estas organizaciones se fusionan para dar origen al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y pasar a la lucha armada. Al disponer de apoyos urbanos, el EPR se libra desde entonces a una actividad de agitación y de propaganda al interior de las montañas de Guerrero, al mismo tiempo que tiende ocasionalmente emboscadas a las fuerzas del orden, cuyos efectivos deben ser reforzados en la región. La protección que brinda a las comunidades rurales contra los abusos de los notables, las exacciones de las guardias blancas y los desbordes de la violencia policiaca y militar le aseguran simpatías y complicidades en el seno de la población. La escisión que sufrieron sus rangos en 1998, de la cual surgió el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) no parece haber afectado la dinámica del movimiento insurreccional. El EPR y el ERPI, por otra parte, se dividen el terreno más que disputárselo, y a veces llegan a coordinar sus operaciones. Las dos organizaciones discrepan, sin embargo, en cuanto a las opciones estratégicas que han tomado. El EPR lleva a cabo una "guerra popular prolongada" en la estricta ortodoxia maoísta. Piensa que para llevar a las masas a sublevarse es indispensable proceder antes a su concientización. El ERPI, por el contrario, da muestras de una mayor flexibilidad doctrinaria. Aunque inscribe su combate en el largo plazo y reconoce la importancia del trabajo político, considera que la sublevación de las masas puede producirse en cualquier momento y que conviene entonces prepararse desde ya para tomar su dirección. Por otra parte, el EPR no ve en las elecciones sino un lastre, mientras que el ERPI considera que, en ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones la boleta electoral puede convertirse en un arma eficaz. Por fin, el primero condena sin remisión a todos los partidos políticos, mientras que el segundo intenta a veces infiltrar las bases del PRD con vistas a enquistarse.

Si el ERPI permanece acantonado en Guerrero, el EPR ha logrado desbordar los límites de este estado, donde la agitación arrecia de manera endémica desde que Juan Álvarez, que reinó por mucho tiempo como potentado después de la Independencia, lanzaba periódicamente a sus indios al asalto del poder central. Su actividad se extiende hoy a Oaxaca en el sur, así como a Michoacán y al estado de México al norte. En el otoño de 1999, un comunicado dirigido a la prensa anunciaba que se acababa de implantar en la

sierra de Veracruz, al este. Pero aunque haya creado un sitio en la red, el EPR no ha suscitado en su favor una movilización comparable con la que el EZLN suscitó a nivel nacional e internacional combinando, no sin genio, una nueva tecnología, la computadora, con una institución también nueva, la ONG. El reconocimiento hecho públicamente de su ideología marxista, cuando el marxismo ha pasado de moda en los medios políticamente correctos, constituye sin duda el error más grave de una política de comunicación externa, por ahora poco expresiva y bastante mal dirigida. Como consecuencia tanto el EPR como el ERPI no pueden contar sino con las fuerzas que son capaces de acumular en las zonas de operación.

La huelga de la UNAM

POR regla general, las organizaciones de extrema izquierda se muestran muy celosas de su autonomía, tanto que su participación en acciones comunes es siempre problemática. La huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) representa en muchos sentidos una excepción a la regla.

El 20 de abril de 1999 los estudiantes de la UNAM se declaran en huelga y ocupan el campus universitario para protestar contra el notable aumento de las cuotas de inscripción, que las devaluaciones sucesivas de la moneda habían hecho, en realidad, simbólicas. El Consejo General de Huelga (CGH) que se establece, está dominado por los militantes sindicales cercanos al PRD y conocidos por las autoridades rectoriles, de las que constituyen los interlocutores oficiales. Pero pronto estos dirigentes se encuentran marginados y suplantados por los nuevos líderes mal identificados, de los cuales se sabrá más tarde que han surgido del Frente Zapatista de Liberación Nacional —brazo político del que se ha dotado el EZLN en 1997—, del Frente de Liberación Francisco Villa, del Comité en Lucha, y por lo menos de otras ocho organizaciones clandestinas o semiclandestinas. Desde entonces, el CGH radicaliza su posición. Previamente a la apertura de toda negociación, exige no sólo la anulación del aumento de las cuotas sino también la abrogación de las distintas medidas que el Consejo Universitario ha adoptado en el curso de los años anteriores para elevar el nivel académico de la UNAM. El movimiento cambia de naturaleza. De corporativa, la huelga se hace política y tiende a hacerse insurreccional.

Atormentado por el recuerdo de los acontecimientos del 68, como el presidente Zedillo debía confesarlo con medias palabras, el gobierno dejará durante largos meses a la rectoría ante un estéril enfrentamiento con un CGH encerrado en su intransigencia. Los cínicos, que no siempre están equivocados, pretenden que deliberadamente apostó a que la situación se pudriera. Después de todo, hay que observar que la crisis en la que los estudiantes —o quienes pretendían representarlos— hundían a la UNAM despejaba el camino al proyecto de modernización que había concebido para un establecimiento en otra época prestigioso, pero que la masa de sus 300 000 estudiantes hacía derrumbar y cuya calidad de enseñanza, así como el valor de los diplomas, no dejaba de bajar. La observación es quizás pertinente, pero también, y sobre todo, habrá que notar que, al ganar tiempo, el gobierno evitaba la trampa en la que el CGH quería hacerlo caer.

A partir del mes de octubre, en efecto, quedó claro que los huelguistas trataban de provocar la represión de su movimiento. Las acciones que ahora lanzaban a la ciudad desde el campus, algunas de las cuales tomaban el aspecto de operaciones de guerrilla urbana, no apuntaban a otro objetivo. Sin embargo, la opinión pública, cansada, se inclinaba cada vez más en contra de ellos, desde que algunos eminentes profesores, que hacía tiempo se habían ofrecido como mediadores, se habían dado cuenta por fin de la inutilidad de su iniciativa. A fin de año, el nuevo rector, dotado de mayor sentido político que su predecesor, daba públicamente la prueba de que la responsabilidad de la prolongación de la huelga correspondía totalmente al CGH. En enero del 2000 consultó a la comunidad universitaria, que se pronunció en más de 90% por la reanudación de los cursos.

Para el gobierno, los riesgos políticos que implicaba una solución de fuerza no habían con esto desaparecido, pero eran ya menores de los que implicaba el entibiamiento. El 6 de febrero, más de 2 000 hombres de la Policía Federal Preventiva, desprovistos de armas de fuego por mandato presidencial, atacaban el campus de la UNAM sin encontrar resistencia. La huelga había terminado. Los huelguistas podían sumar en su haber que había durado 292 días. En el pasivo debería figurar especialmente el deterioro de los locales de la universidad, la desaparición de su equipo informático, el robo de su parque automotriz, el saqueo de su videoteca y la pérdida de los mejores estudiantes, que habían emigrado hacia establecimientos privados.

* * *

TRES días después, cerca de 200 000 personas salían a la calle en la ciudad de México para pedir la liberación de los 174 huelguistas acusados de robo, de deterioro o de alteración del orden público. La multitud abuchea al presidente, al gobierno, al PRI e incluso al PRD, que sin embargo la había convocado, pero cuyos dirigentes están ausentes de la manifestación, como algunos creen deber señalarlo el día después en la prensa.

Esta manifestación, quizás la más importante que haya tenido lugar desde que Zedillo está en el poder, no sólo revela la capacidad del PRD para tomar caminos falsos y tomar iniciativas que se vuelven contra él. También pone en evidencia el hecho paradójico de que los responsables del saqueo de una universidad popular encuentren tanto apoyo en las capas más bajas de la población. La paradoja es sólo aparente. La UNAM, en efecto, no es hoy ese formidable elevador social que su fundador, José Vasconcelos, había querido, y que fue por mucho tiempo. La universidad no es más del pueblo, ni el pueblo de la universidad, contrariamente a lo que ilustra el fresco del cual Siqueiros ha adornado la rectoría. Por humildes que puedan ser sus orígenes, los estudiantes que la frecuentan aparecen como privilegiados a los ojos de todos aquellos a los que el subempleo y la miseria quitan la esperanza de dar a sus hijos una educación. Éstos forman una muchedumbre innumerable pero invisible. No aparecen en las estadísticas, su opinión no tiene derecho de ciudadanía en los medios de comunicación, sus intereses no son tomados en cuenta por los partidos políticos. La única manera de hacerse visibles es salir a la calle al llamado de cualquiera, bajo cualquier pretexto, y gritar su rabia a la cara de todos. Es lo que parecen haber hecho el 9 de febrero del 2000.

Traducido del francés por Hernán G. H. Taboada